



NUE 21-ADP-2019 (SP)

contra el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP): San Salvador, a las once horas con quince minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

A. Descripción del Caso

I. El 6 de marzo de 2019, [REDACTED], presentó escrito a través del cual apela la resolución del oficial de información del **Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)** a su solicitud de acceso a sus datos personales de fecha 30 de enero de 2019.

Respecto de la solicitud realizada por [REDACTED], posterior a esta, se procede a la delimitación del objeto de controversia, el cual se resume: *"copias certificadas de las planillas de descuento de los años y meses siguientes: (i) del año 1995, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; (ii) del año 1996, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre y (iii) del año 1998, los meses de abril y agosto"* todas en relación a su salario devengado por sus servicios dentro del ente obligado.

Por su parte, el oficial de información del **ISRI** resolvió "luego de realizar las diligencias de búsqueda de la información requerida por el peticionario, ante la Unidad Financiera Institucional, Tesorería Institucional y en la Unidad Contable, aduciendo que no contaban con la información solicitada; por ello, comunicó que solo se contaba con información del año 2014 a la fecha".

Página 1 de 9

Es...



Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad, solicitando que se le proporcione la información puesto que es de vital importancia a fin de demostrar en el Seguro Social los años cotizados para el cálculo de su pensión.

II. El apelante interpuso recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual fue admitido, designando al ex comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

No obstante, ocurrida su renuncia, el caso se reasignó a la Comisionada **Silvia Cristina Pérez Sánchez**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al ISRI para que rindiera su informe. No obstante haberse otorgado dicha oportunidad procesal, el ISRI no rindió informe alguno.

III. La audiencia oral, se desarrolló con la comparecencia del apelante; y del licenciado Jaime Esaú Rivera Ferrer, apoderado del ente obligado.

En etapa de alegatos, el apelante expuso la situación en la cual él no puede demostrar al Seguro Social la existencia de descuentos en sus salarios correspondientes a los meses y años ya mencionados dado que no hay documento fidedigno alguno que ampare que en el ISRI se le hicieron retenciones a su salario en concepto de pensión.

Posteriormente el apoderado del ISRI, manifestó en un primer momento que al tener conocimiento de la apelación interpuesta en contra de su representada se iniciaron gestiones de búsqueda en coordinación con el encargado de Archivo Institucional del ente obligado a fin de recolectar la información solicitada por el apelante. Luego, se invocó lo consignado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) en el sentido que el mismo estipula que *“Las unidades financieras institucionales conservarán, en forma debidamente ordenada, todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas e información contable [...] la documentación deberá permanecer*

archivada como mínimo por un período de cinco años y los registros contables durante diez años”, regulación a la cual se encuentra obligado a cumplir el ISRI. Solicitando, se exonere de toda responsabilidad al ISRI en aras a cumplir lo dispuesto la ley antes mencionada.

Al otorgarle nuevamente la palabra al apelante, este manifestó encontrarse inconforme con lo dispuesto en la Ley AFI puesto que se vulnera su derecho al goce de una pensión digna acorde a sus servicios prestados como trabajador en el caso que no se otorgue la documentación solicitada.

Dentro de la última intervención por parte del representante del ente obligado éste reafirmó su posición. Mencionando que se tuvo a bien realizar una búsqueda en coordinación con el encargado de Archivo Institucional del ISRI donde se logró recolectar la información no contenida en la delimitación del objeto de controversia y que corresponde a los años y meses que comprenden 1996 al 2000.

B. Análisis del Caso

Una vez establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Algunas consideraciones sobre la protección de datos personales; (II) Breve análisis sobre la inexistencia de la información; y (III) Naturaleza de la información solicitada.

I. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros¹.

a. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante,*

¹ Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante” (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Definitiva de Amparo del día 4 de marzo de 2012 con referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales es el medio por el cual se salvaguarda los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en el principio de seguridad jurídica, establecido en el art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—; lo decisivo, es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona, hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen, solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 16); al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales

y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

b. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de acceso (art. 36 letras “a”, “b” y “c” de la LAIP) y el derecho de rectificación a los datos personales (art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional² el primero es la *“facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad que se persigue”*; y, el segundo es el derecho de solicitar *“la modificación de los datos que aparecen erróneamente consignados y obtener así la integración de los que sean incompletos”*.

II. En este punto, es importante mencionar que el art. 73 de la LAIP dispone que cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia que se encuentre, y, en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

Este Instituto ha reconocido con anterioridad como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria³.

Por otra parte, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información **no se encuentra en los archivos de la autoridad** —; es decir, se trata de una cuestión de hecho —; no obstante, que la dependencia o la autoridad cuente con las facultades

²Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 con referencia 934-2007.

³ Resolución Definitiva LAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.



para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada⁴.

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto⁵, se han tomado como base los criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) que, en relación a la inexistencia de la información ha establecido: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ello, se deberá acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales, consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se turnó la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (sujeto obligado), ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

En ese sentido, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, **no debe ser utilizada como un límite al DAIP o al acceso a Datos Personales** de los solicitantes de la información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

III. Ahora bien, en este apartado resulta pertinente analizar si el ISRI realizó las diligencias necesarias para ubicar la información, la cual no cabe duda que pertenece al apelante, pues constituye información personal, que le permite acceder al goce a la seguridad social conforme al Art. 50 de la Constitución de la República. Este derecho ha sido concebido

⁴ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

⁵ Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.

por la jurisprudencia constitucional de nuestro país como: *“la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de otra manera, implicarían la desaparición o fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte”*⁶.

Una vez establecido lo anterior, es pertinente señalar que el apoderado del ISRI en la audiencia oral realizada en este procedimiento, manifestó la voluntad del ente obligado por hacer entrega de la información solicitada; vista de ello es que durante el trámite de esta apelación, hizo entrega de cierta parte de la documentación requerida, la cual consiste en copias certificadas de las planillas de descuento de los años y meses siguientes: (i) 1997, 1999 y 2000 de forma completa, (ii) de 1995 los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, (iii) de 1996 los meses de agosto, noviembre y diciembre, y (iv) de 1998 los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; no obstante lo anterior, no se hizo entrega de la documentación complementaria la cual consiste en las planillas de descuento de los años y meses siguientes: (i) del año 1995, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; (ii) del año 1996, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre y (iii) del año 1998, los meses de abril y agosto, todas a nombre del apelante.

En ese sentido, es oportuno mencionar que el ente obligado no negó que el apelante trabajase en el periodo solicitado, tampoco argumentó fuerza mayor o caso fortuito que explique de alguna forma el hecho de que la información no se encuentra en las unidades a las cuales fueron solicitadas o en el archivo central de la institución; por otro lado, la entrega de cierta información, debilita el argumento del ISRI sobre la no obligación de no contar con la información, de acuerdo a la Ley AFI, pues esto demuestra objetivamente que la información puede ser encontrada en dicha Institución.

Por tanto, este Instituto conforme a la sana crítica considera modificar la resolución objeto de controversia, ordenando realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información faltante de la solicitada por el apelante, la cual no solo debe limitarse en las unidades que han

⁶Resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, en el proceso de Inconstitucionalidad



sido previamente consultadas, sino también en otras unidades que objetivamente pueden tenerlo, incluyendo el archivo central. Dicha búsqueda debe ser liderada por el oficial de información en conjunto con el jefe de la Unidad de Gestión Documental, debiendo registrar mediante acta todas las diligencias efectuadas para el efecto. Una vez concluida dicha búsqueda deberá entregar la información, en caso de no encontrarla deberá realizar un acta de inexistencia, plasmando todas las diligencias efectuadas y adjuntarlas, debiendo entregarlo también al apelante.

C. Decisión del Caso.

a) Modificar la resolución del oficial de información del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, del 30 de enero de 2019, por las razones antes mencionadas, por ende, es preciso ordenar que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, realicen una nueva búsqueda de la documentación consistente en *“copias certificadas de las planillas de descuento de los años y meses siguientes: (i) del año 1995, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; (ii) del año 1996, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre y (iii) del año 1998, los meses de abril y agosto”* todas a nombre de [REDACTED], con especial énfasis en la faltante, es decir las planillas de descuento de los años y meses siguientes: (i) del año 1995, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; (ii) del año 1996, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre y (iii) del año 1998, los meses de abril y agosto, todas a nombre de [REDACTED]. Dicha búsqueda no solo debe limitarse en las unidades que han sido previamente consultadas, sino también en otras unidades que objetivamente pueden tenerlo, incluyendo el archivo central, estas diligencias deben ser lideradas por el oficial de información en conjunto con el jefe de la Unidad de Gestión Documental, debiendo registrar mediante acta todas las actividades efectuadas para tal efecto. Una vez vencido el plazo anterior, en el plazo de 24 horas deberá entregar la información, en caso de no encontrarla deberá realizar un acta de inexistencia, plasmando todas las diligencias efectuadas y adjuntarlas, debiendo entregarlo también al apelante.

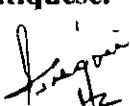
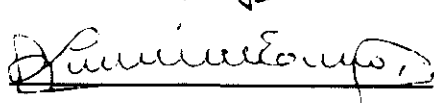

b) **Ordenar al ISRI** que, a través de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del último de los plazos señalados en literal a) de la parte resolutive, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante o el acta de inexistencia junto a sus anexos, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

c) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

d) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese. -

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

CS

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



